IMPRÍMELO
ENVÍALO
DESCÁRGALO
COMÉNTALO
Nº 01 JUNIO 2010
CCOO
servicios a la ciudadanía



Opinión
El Gobierno debilita el Estado de Bienestar
Por: Ignacio Fernández Toxo
p. 02-03



Opinión
No es solo la economía, es la democracia
Por: Juan Torres López
p. 04-05

tribuna de los servicios a la ciudadanía

www.fsc.ccoo.es



Opinión

Por: Ignacio Fernández Toxo, *secretario general de CCOO*
Humor gráfico: Toni Batllori

El Gobierno debilita el Estado de Bienestar

Después de la quiebra del sistema financiero estadounidense provocada por la emisión fraudulenta de los bancos de inversión de activos financieros por valor de billones de dólares, y la posterior extensión al consumo y la producción mundial, todos los analistas coincidieron en que tan sólo la decidida y masiva intervención del sector público evitó el riesgo sistémico y el colapso de la intermediación financiera. Una intervención que, sin embargo, no evitó una rápida y abrupta recesión económica en la mayor parte del mundo.

Fueron tiempos de políticas públicas y manual keynesiano. De dignos amagos sobre la supremacía de la democracia y de la política. Pero fue un espejismo. Aquellos que reclamaron un paréntesis al capitalismo y que esperaron agazapados hasta que escampara; los que provocaron el desastre y vivieron aparentemente bajo el signo del descrédito social; los ideólogos del capitalismo de casino, que parecen no tener rostro; todos ellos han emergido de nuevo y han puesto a los gobiernos a sus pies, recetando mercado y agitando convulsiones monetarias.

El Gobierno español ha sido uno de ellos. Incapaz de prever la dimensión de la crisis, fue aceptando su gravedad a medida que improvisaba un paquete tras otro de medidas de corto alcance y escasa o nula coordinación. Sumó a su insolvencia una acusada ausencia de liderazgo que, en tiempos de recesión, se nos antojaba imprescindible para convocar a las fuerzas políticas y sociales y explorar la posibilidad de un Pacto de Estado. En su lugar se fueron sucediendo acuerdos de baja intensidad y alta disputa mediática, siempre activados por un Partido Popular cegado por el horizonte electoral.



El Gobierno cambió el rumbo e interpretó de la forma más ortodoxa las recetas del liberalismo económico: menos Estado de Bienestar y más confianza en los mercados, es decir, más sacrificio para los de siempre.

No faltó en este festival de despropósitos, la Unión Europea, más atenta a los vaivenes de los mercados, que a la necesidad de preservar la Unión Política y Monetaria. De la primera, mejor no hablar; y de la segunda, sólo cabe hablar de decepción y fracaso. Una decepción que deriva en irresponsabilidad cuando se trata de hacer frente a situaciones de grave crisis económica y financiera como la de Grecia, a la que se atendió tarde y mal, sometiéndola a la dictadura de los mercados financieros.

Y entonces, llegó el plan de ajuste. El presidente del Gobierno lo anunció en el Congreso de los Diputados el

Humor gráfico: Alfons López

12 de mayo, y el Consejo de Ministros lo aprobó el 20 de mayo. Un plan para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros hasta 2011, a rebufo de los mercados, de la UE y de los dictados del FMI. Un nuevo paquete de medidas, pero esta vez, con un objetivo claro y unas víctimas definidas. El objetivo: reducir el déficit público, recortando drásticamente el gasto social; las víctimas: pensionistas, empleados públicos y personas dependientes. En unos días, el Gobierno cambió el rumbo e interpretó de la forma más ortodoxa las recetas del liberalismo económico: menos Estado de Bienestar y más confianza en los mercados, es decir, más sacrificio para los de siempre.

ESTE NO ES EL CAMINO

CCOO no tardó en responder. Las medidas contempladas en el plan nos parecen injustas (afecta a alguno de los sectores más débiles de la sociedad), desequilibradas (se opta por reducir el gasto abandonando cualquier iniciativa para aumentar los ingresos), antieconómicas (reducen la capacidad de compra de pensionistas y empleados públicos lo que provocará un descenso del consumo y un freno a la reactivación), quiebran la legitimidad del diálogo social (el consenso parlamentario y social derivado del Pacto de Toledo y de los acuerdos con los empleados públicos saltan por los aires) y contaminan la negociación colectiva en el sector privado (en numerosos convenios los empresarios han roto compromisos salariales anteriores).

En coherencia con el análisis que nos merece el plan de ajuste, los sindicatos acordamos una huelga general en las Administraciones Públicas para el 8 de junio, y advertimos al Gobierno que de seguir por el camino del recorte del gasto social, vulnerando derechos sociales y laborales, quedan abiertos todos los escenarios de movilización social, incluida la huelga general. Concretaría más: si además del plan de ajuste y en ausencia de acuerdo en la mesa de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno legisla por decreto contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general, según acordó nuestro Consejo Confederal reunido el pasado 27 de mayo. No podemos tolerar que la destrucción de empleo que se acerca ya a los 4,7 millones de parados y el ataque al Estado de Bienestar, cuyo origen hay que buscarlo en las políticas especulativas y la crisis del sistema financiero, se agiten como la "única posibilidad de superar la grave crisis por la que atraviesa la economía española".



Hemos repetido hasta la saciedad que hay otra forma de hacer las cosas. Se puede y se debe reformar el sistema financiero, para que fluya el crédito a familias y empresas; hay que recuperar figuras tributarias alegremente eliminadas (impuestos de patrimonio, de sucesiones, modificar impuesto de sociedades...); hay que abordar de una vez por todas el debate para una nueva fiscalidad, más ambiciosa y equitativa; se tiene que precisar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que permita cuantificar anualmente los ingresos obtenidos. En definitiva, el plan de ajuste no es la única salida. O somos capaces de compartir sacrificios para superar la delicada situación económica, y trabajamos por un acuerdo de todos, en el que el Gobierno se implique con decisión y firmeza, o entraremos en tiempos de creciente y sostenida movilización general contra las medidas injustas y antieconómicas que ha aprobado el Gobierno.

Opinión

Por: Juan Torres López *catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla*
Humor gráfico: Manel Fontdevila

No es solo la economía, es la democracia

Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son "el chocolate del loro".

Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en genera. Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento de la negociación colectiva.

Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.

Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.

Los grandes financieros y los poderes económicos han conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos no solo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota histórica de las clases trabajadoras.

El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la actividad para que las economías no colapsaran. El resultado inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.

Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran negocio de la deuda pública cuando se produjera y, al mismo tiempo, lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca.

Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes.

Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo político.

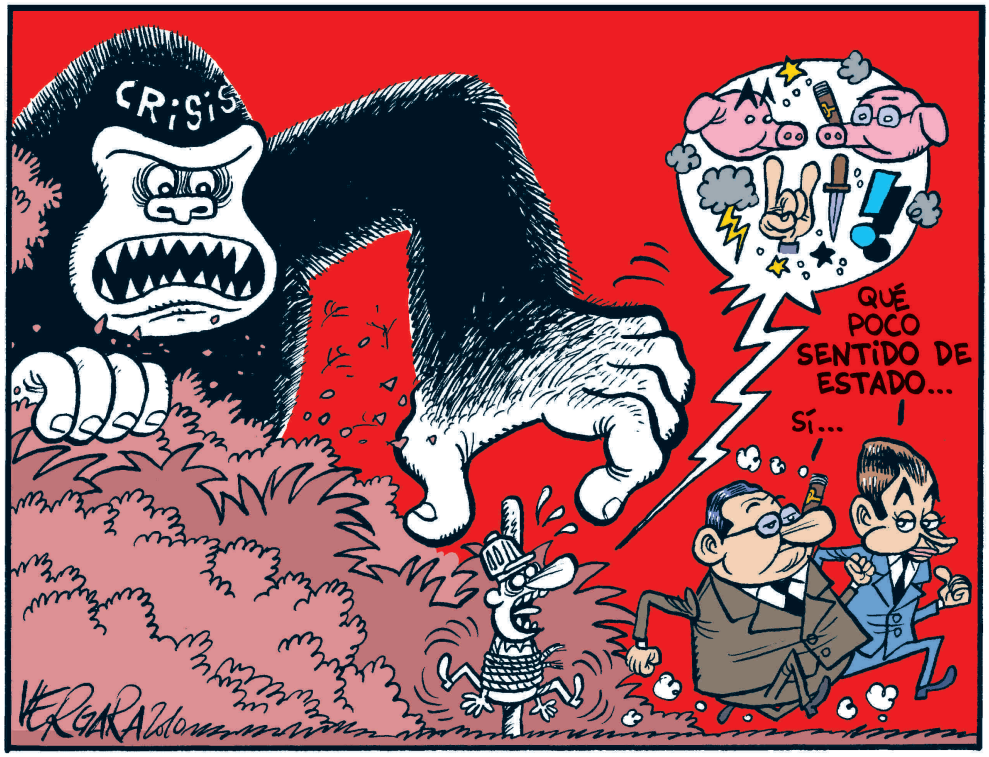
Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 ó 5% o a seguir especulando.

Y no solo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, incluso el 10%.

De esa forma los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, pero no solo eso.



Humor gráfico: Bernardo Vergara



Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones políticas draconianas.

Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias de *rating* que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos no aplican el ajuste porque entonces "los mercados" no confiarán en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduce la expectativa de crecimiento... ¡como consecuencia de la aplicación del ajuste!

Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso es lo que quieren mantener.

Pero saben perfectamente que en esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

> Lo que verdaderamente está en juego es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.

No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas, ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social.

Lo que está en juego, pues, no es solo una cuestión salarial, ni un tijeretazo más o menos grandes a los gastos del Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

Carta

Por: **Enrique Fossoul de la Sierra,** *secretario general de la FSC-CCOO*

A toda la afiliación de la FSC-CCOO

Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Estamos a pocos días de la HUELGA GENERAL del Sector Público, convocada unitariamente por CCOO, CSIF y UGT, con el apoyo de otros sindicatos y asociaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

La crisis financiera y económica internacional, la primera gran crisis de la economía globalizada, que sufrimos desde mediados de 2008, tiene su origen en la prevalencia de la economía especulativa frente a la productiva y la ausencia de controles de un sistema financiero que jugando irresponsablemente ha liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.

Desde CCOO hemos planteado propuestas concretas para actuar sobre el empleo y el tejido productivo, estableciendo las bases de un nuevo modelo productivo que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma, asegurando la cohesión social. Los sindicatos, estamos comprometidos con los sectores más desfavorecidos impulsando medidas de protección hacia ellos.

Sin embargo, la subordinación del Gobierno español a los intereses de los mercados financieros, ha forzado una salida muy diferente. Primero fue el Plan de Austeridad y la intención de alargar la edad obligatoria de jubilación de los 65 a los 67 años y ahora se concreta con el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Estas medidas suponen: la congelación de las pensiones; el recorte de un 5% del salario de las empleadas y los empleados públicos con la confusa amenaza, en su aplicación inmediata, de que dicho recorte afecte al conjunto del Sector Público. Lo que no dudamos es que se quiere hacer realidad, ya que se condiciona su negociación colectiva a la autorización de la masa salarial por el Ministerio de Economía y Hacienda (art. 25.4) excluyendo singularmente a tres empresas (ADIF, RENFE Operadora y AENA) de los recortes, pero no de la prevista congelación para 2011; la supresión del período transitorio para adaptar el régimen de jubilación parcial; el ajuste del período de carencia para tener derecho a pensión hasta 15 años; la supresión de la retroactividad en materia de ayuda a la dependencia; o, la reducción de la inversión pública.

Unas medidas que insisten en la reducción de los gastos, incluidos los sociales, renunciando a intervenir por la vía de incrementar los ingresos, vía impuestos, como han hecho o han anunciado otros países, elevando la presión fiscal a las grandes empresas y rentas más altas que, pese a la crisis, mantienen elevados beneficios e ingresos, o actuando sobre el fraude fiscal y la economía sumergida.

Estas medidas nos cargan de razones para ir a la HUELGA GENERAL en el Sector Público, por que hay que dar una respuesta contundente a una agresión de tal calado y hay que darla ahora, en el momento en el que se van a comenzar a aplicar los recortes salariales.

Porque LA IMPOSICIÓN DEL RECORTE DE LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS ES INJUSTO, tras haber aceptado en el acuerdo del 25 de septiembre un esfuerzo solidario de contención para el período 2010-2013, vulnerando, por lo tanto, el derecho a la negociación y castigando a colectivos en muchos casos con salarios moderados



y bajos, cuyo trabajo es básico para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Porque con este RECORTE se REDUCE LA CAPACIDAD DE COMPRA de más de 11 millones de personas del sector público y pensionistas, lo que provocará un descenso del consumo cuando la reactivación necesita estimular la demanda.

Porque dicho RECORTE ES DESEQUILIBRADO pues se opta por reducir la inversión en obra pública que frenará la actividad económica y supone la renuncia a crear empleo en ese ámbito.

Porque la anunciada REDUCCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO supone una APUESTA POR LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, abriendo una clara puerta a la externalización y privatización de servicios fundamentales para la ciudadanía, como la Educación, la Sanidad, etc.

Porque la RENUNCIA a avanzar en medidas como LA JUBILACIÓN ANTICIPADA O LA JUBILACIÓN PARCIAL, pone aún más obstáculos para el acceso de la juventud al mercado de trabajo, mientras se producen los intentos de la patronal y del Gobierno de abrir paso a un contrato más desregulado y sin derechos.

Pero lo más importante es que las medidas SUPONEN UNA QUIEBRA DE LA LEGITIMIDAD DEL DIÁLOGO SOCIAL, pues la congelación de las pensiones va en contra de 15 años de consenso en torno al Pacto de Toledo, al dejar sin efecto una de sus regulaciones legales: la revalorización anual de las pensiones. Porque REDUCIR EL SALARIO DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICOS "POR DECRETO" es un manifiesto incumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado septiembre entre Gobierno y sindicatos y CUESTIONA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA RECOGIDO EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

Porque intervenir en la negociación colectiva del personal laboral de las administraciones públicas, recortando sus salarios, y condicionando los futuros incrementos del resto del Sector Público, SIGNIFICA UNA VULNERACIÓN sin precedentes del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES y deja a estas personas en una situación de indefensión a la hora de negociar sus condiciones de trabajo.

Porque a nadie se le escapa que, con la patronal que tenemos en este país, estas medidas CONTAMINARÁN EL DIÁLOGO SOCIAL GENERAL y AMENAZAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PRIVADO.

En consecuencia, me permito, como secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, dirigirme a ti, porque lo que está en juego el 8 de junio es más que el rechazo a un recorte y una congelación, a la reducción del empleo público con la amortización de vacantes con sus efectos en la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos, a la paralización y retracción de la inversión pública con su efecto en el empleo y en cohesión territorial, al retroceso del sector público acosado por las ansias privatizadoras de la derecha y la patronal. Lo que ESTÁ EN JUEGO ES LA PROPIA ESENCIA DEL DERECHO LABORAL: el DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Por todo ello, te pido que, como parte de la afiliación de la FSC-CCOO, PARTICIPES ACTIVAMENTE EN LA HUELGA Y LAS MANIFESTACIONES DEL 8 DE JUNIO. ■

Enrique Fossoul de la Sierra
Secretario General FSC-CCOO



tribuna de los servicios a la ciudadanía
www.fsc.ccoo.es

Ahora, más que nunca, más y mejores Servicios Públicos

Por: Pepé Gálvez

Porque estamos hartos de ser chivos expiatorios de errores ajenos.

Porque estamos cansados de que se nos congelen y recorten salarios para que una minoría aumente sus beneficios individuales.

Porque estamos indignados ante la vulneración, una vez más, de lo acordado en la negociación colectiva.

Porque estamos aburridos de que el déficit público sólo se corrija recortando nuestras retribuciones.

Porque queremos acabar con la temporalidad injustificada en el ámbito del empleo público.

Porque queremos un sector público eficaz que contrarreste la creciente desigualdad social impuesta por los mercados y asegure condiciones de bienestar para la mayoría social.

Porque es necesaria una reforma fiscal de calado que combata los abusos de la especulación financiera y que derive hacia los ingresos públicos las grandes sumas que ahora se dilapidan en lujos inútiles.

Porque somos servidores públicos, estamos orgullosos de serlo y queremos seguir estándolo.

Por todo ello, la huelga general de las administraciones y servicios públicos del próximo 8 de junio debe ser una jornada de reivindicación de la dignidad del servicio a la ciudadanía. ■

Porque es necesaria una reforma fiscal de calado que combata los abusos de la especulación financiera

Por: Pepé Gálvez y Alfons López - *Viñetas realizadas para el Tribuna en noviembre y diciembre del 2000*

